

¿Un nuevo paradigma político-democrático?

PETER GOWAN

Universidad de North London

Actualmente va en aumento el número de voces que se elevan para sugerir que la democracia tiene serios problemas. Algunas de ellas enfatizan el desapego popular hacia los gobiernos electos: tal es el caso de Fritz Scharf, quien habla de un «profundo malestar político en, prácticamente, todo Occidente».¹ Otros dirigen su atención hacia lo que interpretan como una pérdida de la capacidad de actuar políticamente del estado occidental. Robert Putnam detecta una pérdida de autoridad estatal a la vista de la creciente evasión del fisco, del servicio militar y de otros deberes cívicos por parte de los ciudadanos. Los disturbios se han vuelto algo corriente en la Gran Bretaña de los ochenta y los noventa, y en los países avanzados, la violencia callejera, los ataques xenófobos y los movimientos de protesta son cada vez más comunes. Francia ha conocido también huelgas impactantes.

Por muy serios que puedan ser los problemas en los estados capitalistas avanzados, el malestar en las democracias liberales periféricas, establecidas más recientemente, es, en varios casos, mucho más grave. La única democracia de partidos de larga tradición en Latinoamérica, Venezuela, conoció en los noventa el colapso de su sistema de partidos y el ascenso de un movimiento de masas populista, de culto al líder.

De las democracias liberales más recientes, pocas están experimentando desarrollo político. En muchas partes del antiguo bloque soviético las instituciones políticas son débiles, o bien están en crisis.

El propósito de este artículo es examinar las explicaciones comúnmente ofrecidas para esta crisis de la democracia liberal. La mayoría de éstas constituyen una lectura pesimista. O bien trivializan el problema, o bien sugieren que las fuentes de la crisis están fuera del alcance de los existentes sistemas nacionales de actuación política. Por mi parte intentaré argumentar que la crisis es, en efecto, grave, pero susceptible de responder a soluciones políticas. La primera parte —el grueso del artículo— se centra en las democracias liberales de los países avanzados y, especialmente, en Europa. En la segunda parte echaremos un breve vistazo a los estados situados fuera del núcleo de tradición democrática. Concluiremos con algunos pensamientos sobre posibles vías para salir del malestar.

Primera parte. Los países nucleares de tradición democrática liberal

La respuesta democrática liberal a los profetas de la crisis democrática

Hay una poderosa corriente de pensamiento que niega la existencia de crisis alguna de la democracia. Sostiene, por el contrario, que el mundo se encuentra en transición, tras una larga era en la que un estado excesivamente poderoso intentaba usurpar las libertades individuales e imponer sus concepciones del bien colectivo a los ciudadanos, en lugar de proporcionar un marco en el que los individuos pudieran elegir sus propios fines.

Con gran parte de justicia, los que se oponen a la tesis de la democracia en crisis defienden que, en términos de la teoría normativa democrático-liberal contemporánea, no hay crisis de legitimidad alguna, salvo en el marco de la estructura institucional de la Unión Europea. Según esta teoría, la autoridad del liderazgo político del ejecutivo encuentra su fuente de legitimación democrática en el libre voto popular por un partido entre varios en contienda. Siguiendo este punto de vista, en la democracia liberal, la obligación política obtiene su fundamento en el consentimiento tácito de los ciudadanos al proceso electoral. Este consentimiento es otorgado tanto por los que se abstienen de votar como por los que participan.

Como ya sostuvo Carole Pateman hace tiempo, esta teoría de la obligación política puede ser espuria.² Sin embargo, ha sido enormemente poderosa como justificación ideológica del modelo Atlántico de democracia liberal a lo largo del siglo XX. Además, con una única importante excepción europea, permanece hasta hoy institucionalmente anclada en las democracias liberales de Occidente. Hay elecciones competitivas, y éstas producen gobernantes institucionales al frente de los ejecutivos estatales de las democracias liberales. Aquí radica, por tanto, la identidad democrática de líderes y liderados, identidad que da lugar al argumento normativo de que los ciudadanos deben aceptar las decisiones políticas. Los ciudadanos que rechazan tales obligaciones deben ser devueltos al redil.³ Así, en los términos de los fundamentos normativos de la democracia liberal occidental, no hay base para una crisis, y, por tanto, no hay crisis. Entonces, si hay insubordinación por parte de algunos al consentimiento del conjunto de los ciudadanos, habrá que ocuparse de estos recalitrantes.

El déficit democrático y la supremacía jurídica de la UE

Hay, claro está, una excepción al argumento de que la base de la legitimidad democrática permanece intacta: la Unión Europea. Ésta padece, como lo expresa Scharpf, un déficit de legitimación democrática: sus gobernantes institucionales, investidos con el poder de llevar a cabo actuaciones políticas, no son selec-

cionados por un proceso electoral.⁴ No hay base para establecer vínculo causal alguno entre la voluntad de los parlamentarios y la voluntad de las mayorías numéricas de los ciudadanos europeos que participan en elecciones de la UE. Padece, asimismo, un déficit de legitimación liberal, porque las discusiones dentro de su principal órgano deliberativo son mantenidas en secreto, sin que se publiquen siquiera sus actas.

Sin embargo, la gravedad, en la práctica, de esta negación de la legitimación democrática ortodoxa de la autoridad de la UE se ve atenuada por la naturaleza de los mecanismos de transmisión de las políticas de la Unión a las jurisdicciones de sus estados miembros. Las actuaciones políticas de la UE, con excepción de las operaciones del Banco Central Europeo (BCE), han revestido, en medida abrumadora, la forma de instrumentos legales, es decir, de directivas y reglamentaciones. Y éstas son transmitidas a los estados miembros, preferentemente, a través de sus propios sistemas legales y administrativos, y no a través de burocracias separadas e identificables de la Unión. Por tanto, para la gran mayoría de los ciudadanos de la Unión Europea, el alcance y la sustancia de las políticas de esta última son literalmente invisibles, en el sentido de que son indistinguibles de la legislación puramente nacional. Y la suma discreción en las actuaciones del BCE se ve ahora legitimada por la actual ortodoxia europea según la cual todos los bancos centrales deben verse libres de presiones políticas democráticas o electorales.

Es importante tomar nota de otro rasgo del déficit democrático-liberal encarnado en la Unión Europea: la superioridad de la ley europea sobre la ley nacional, así como del carácter blindado de esta superioridad. Esta característica de la UE proviene de la relación entre ley pública internacional y «ley municipal» (la ley nacional de los estados soberanos). En la jurisprudencia occidental, la ley internacional ha ganado fuerza, básicamente, por la adhesión voluntaria de los estados soberanos a los tratados internacionales. Sin esta adhesión a un tratado, los estados soberanos no estaban tradicionalmente vinculados por una ley pública internacional (salvo excepciones, principalmente los poderes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas). Pero en cuanto un estado ratifica un tratado mediante sus procedimientos constitucionales normales, esa ley internacional adquiere precedencia sobre la «ley municipal».

La Unión Europea está establecida por tratado internacional, y sus poderes sobre la «ley municipal» derivan de la ley pública internacional. Pero a diferencia de la mayoría de las leyes de tratado, las bases del tratado de la Unión Europea se ocupan, en medida abrumadora, de asuntos de *jurisdicción doméstica* de los estados miembros. Así, pasa por encima de las leyes ordinarias de los estados, y su superioridad legal está aún más blindada que la propia ley constitucional del estado miembro. Mientras todos los estados tienen maneras de enmendar sus más o menos blindadas constituciones nacionales, no tienen autoridad siquiera para enmendar las leyes ordinarias de la Unión Europea, no diga-

mos ya las disposiciones del Tratado, que sólo pueden ser enmendadas mediante decisión positiva unánime de todos los estados miembros.

Estos problemas podrían convertirse en el caldo de cultivo de graves conflictos políticos en el seno de la UE, conflictos en los que los adversarios de la Unión podrían dejar al descubierto su carencia de legitimidad democrática. No obstante, este déficit de legitimidad está claramente referido a los estados miembros de la Unión y, por tanto, no se puede atribuir a esta cuestión todos los problemas de la democracia contemporánea. Además, lo que reviste mucha mayor importancia, los síntomas de crisis en el marco de las democracias liberales europeas no aparecen en forma de revueltas nacional-democráticas contra la Unión Europea, al menos hasta hoy, sino que son malestares dentro de los estados miembros. Y estas desazones nacionales internas no pueden ser explicadas por la subordinación, opaca pero real, de las élites políticas de cada estado miembro a un grupo de élite supranacional en la Unión Europea. De hecho, las corrientes políticas que dominan la «Europa Europea» son precisamente las mismas que gobiernan los ejecutivos de los estados miembros de la Unión. La UE ha de ser vista como un instrumento de estos ejecutivos estatales, más que como su amo. En pocas palabras, si el futuro depara algún desafío popular explosivo a la autoridad de la Unión Europea, tal desafío todavía no se ha producido.

El malestar democrático es producto de tirantezas entre las aspiraciones populares y las orientaciones políticas de las actuales corrientes centristas que imperan en los estados que componen la UE, así como en las instituciones que la conforman. Tenemos que descubrir cuáles son las fuentes de este malestar tanto en el ámbito de los estados miembros de la Unión como en el de las autoridades políticas de estados no integrados en ésta.

La deslegitimación del «Welfare State» democrático

La fuente más obvia del malestar democrático en los países avanzados es el desafío a los estados de bienestar socio-liberales construidos después de la Segunda Guerra Mundial. Este alejamiento de lo que podríamos llamar el *Welfare-state* keynesiano se plasma, en parte, en una serie de efectos producidos por las actuaciones políticas: desempleo a gran escala, erosión de la estabilidad del empleo, aumento de la pobreza y de la desigualdad social, presión constante sobre la provisión de servicios sociales. Pero, como lo han señalado algunos autores, el desmantelamiento del estado de bienestar en Europa occidental ha tenido una dimensión bastante menor de lo que muchos creen, aunque los cambios en el mercado laboral han sido sustanciales.⁵

Aun así, el contenido del discurso de las élites de la política y de la comunicación ha variado de rumbo radicalmente en los últimos veinte años: se ha producido un consenso en la élite de la mayoría de los países occidentales en

cuanto a que el programa del *Welfare state* keynesiano debe ser abandonado. Dicho de otro modo, ha emergido un amplio consenso de que el estado debe verse libre de todo un espectro de deberes con respecto a sus ciudadanos: el deber de subordinar el estado a los objetivos del pleno empleo, la ciudadanía social, la redistribución hacia una mayor igualdad social, etc.

Todas estas concepciones de las obligaciones y la naturaleza del estado han sido sometidas a una sistemática campaña de deslegitimación, tanto por parte del centro-izquierda como del centro-derecha, en los últimos veinte años, en Europa, y en otras democracias avanzadas. La Nueva Derecha basa su ataque al antiguo estado político en su supuesta restricción de la libertad individual, y en su supuesta ineficacia económica. Para los *Blairistas* de la tercera vía, la nueva concepción del estado consiste en competitividad modernizada y libertad de elección individual, acompañadas de «igualdad de oportunidades». En cuanto a los socialdemócratas tradicionales, su nuevo argumento se define en términos de realismo respecto a las necesidades económicas. La dimensión que toma esta ofensiva para deslegitimar el estado de bienestar democrático varía según los países: ha revestido mucha más fuerza en el que podríamos llamar mundo anglosajón —notablemente en países como Inglaterra y Nueva Zelanda— que en otras áreas de la Europa continental. La tendencia ha sido, no obstante, general.

Las raíces de esta campaña de deslegitimación se suelen buscar en ciertos cambios habidos en los mercados capitalistas y en los agentes del mercado. Según una extensa literatura surgida en los años noventa, una transformación de la economía internacional —la globalización económica— ha impuesto a las democracias liberales occidentales una lógica transformadora, destruyendo las bases del estado de bienestar democrático.

¿El estado de bienestar «versus» las realidades de la globalización?

Estos argumentos se centran sobre el impacto de los siguientes fenómenos:

1. Los flujos financieros privados internacionales se han liberado del control de los estados, fenómeno que se suele explicar parcialmente por la emergencia de nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
2. La producción globalizada ha aumentado, con la creciente centralidad de las multinacionales en la producción y el comercio transnacionales.

Se considera que estas dos tendencias han fortalecido enormemente el poder de negociación del capital *vis a vis* del estado, ya que han dado al capital la opción de la salida y la del arbitraje. Así, tales tendencias empujan a los estados a luchas competitivas por bajar los impuestos, desregularizar los mercados labo-

rales y dar prioridad a los objetivos anti-inflacionistas y al atrincheramiento fiscal con respecto a los objetivos sociales.⁶

Sin embargo, este análisis presenta dificultades. En primer lugar, un análisis de los flujos macro-económicos no confirma, en términos generales, la proclamada globalización. Los flujos producción-consumo no se han globalizado significativamente, salvo en el campo de la electrónica de consumo y de algunos productos con muy bajo coste de transporte internacional. Se han *regionalizado en una tríada de centros*. Alrededor del 90 % de todo lo que es consumido en cada una de las tres regiones ha sido producido en esa misma región.⁷ En segundo lugar, las relaciones ahorro/inversión mantienen —con una excepción a la que volveremos más tarde— un carácter abrumadoramente nacional, incluso en Europa: la medida en que los países recurren a finanzas de otras regiones para invertir en la suya propia sigue siendo muy limitada. Y el grado en que las condiciones laborales, en los países del ámbito capitalista avanzado, reciben presiones por los competitivos costes de la mano de obra en países fuera del núcleo es, igualmente, muy limitado, aunque cumple su función en los sectores de baja tecnología.⁸ Por otro lado, la inversión extranjera directa de las grandes compañías se ha concentrado básicamente en la tríada, siendo China la única excepción importante. Y esta inversión extranjera directa se ha comportado como una buscadora de mercados: en otras palabras, las principales compañías de cada centro triádico han intentado establecer proyectos en las otras dos regiones con la intención de hacerse con una cuota de mercado en los tres centros. Así, no parece que las multinacionales estén en posición de retirarse de ninguna de las tres regiones simplemente porque encuentren la presión fiscal demasiado alta o el mercado laboral demasiado «rígido». Por último, la literatura sobre globalización exagera tremendamente el espectro de sectores, en los países capitalistas avanzados, que están sujetos a competencia internacional. Mientras que estos sectores son muy importantes en el sentido de que generan mucho valor, el grueso de las poblaciones de los países de capitalismo avanzado no trabaja en ellos, sino que trabaja en sectores de servicios que permanecen al abrigo de las presiones de la competencia internacional.

El argumento de que mantener y fortalecer el estado de bienestar democrático provocaría la salida de capitales del centro triádico parece, por tanto, no tener fundamento en el ámbito regional. Cualquiera que sea la organización política y social de cada centro triádico, ninguna compañía internacional en ninguna parte de la tríada puede permitirse excluirse o quedar excluida de los mercados de los otros centros.

Una explicación alternativa de la transformación económica internacional

Los escritos sobre globalización suelen ignorar dos fenómenos que han marcado el último cuarto de siglo. En primer lugar, el impacto que han tenido ciertas tendencias a largo plazo que no se pueden concebir de ninguna manera como producidas por la globalización. En segundo lugar, hay que tener en cuenta los programas *desarrollados a iniciativa de* ciertos estados para atajar las citadas tendencias a largo plazo. Cuando tomamos nota de estos dos fenómenos, podemos reconocer que los que abogan por una transformación globalizadora se equivocan. Y que sus oponentes, cuando argumentan que no ha tenido lugar ninguna transformación cualitativa en la economía política internacional, se equivocan también.

La primera de estas tendencias a largo plazo fue el estancamiento de las economías atlánticas, que empezó en los años setenta y se ha seguido plasmando desde entonces en las cifras globales de crecimiento del PIB mundial. El comienzo de esta crisis y su posterior desarrollo están bien recogidos en el trabajo de Robert Brenner.⁹

Esta crisis fue unánimemente interpretada como un desafío al *orden internacional de acumulación* de la posguerra, orden que combinaba el marco comercial, financiero y monetario internacional de Bretton Woods con estrategias estatales de desarrollo dirigidas a optimizar producción y empleo. Al mismo tiempo, la crisis revistió la forma de fuertes luchas competitivas entre los capitales de las tres regiones, luchas que adquirieron importantes connotaciones políticas. Y es importante resaltar, dentro de este contexto, que la crisis de estancamiento fue interpretada en los Estados Unidos y en Gran Bretaña como parte integrante de un desafío a mayor escala a su posición de poder en el orden internacional, desafío que requería una respuesta estratégica radical.

Así, en los años setenta dos debates se entrelazaban dentro de los países capitalistas dominantes: uno, sobre cómo cambiar el orden nacional de acumulación con vistas a reavivar la rentabilidad capitalista, y otro, relacionado con el anterior, en el mundo anglo-americano, sobre estrategias para reanimar el poder de Estados Unidos y Gran Bretaña en el orden mundial. Dentro del primer debate una posible solución era la radicalización del orden internacional de posguerra: un «Keynesianismo global» dirigido por instituciones mucho más fuertes, del tipo preconizado por los socialdemócratas de izquierda, reflejado, en parte, en la Comisión Brandt y en los círculos de las Naciones Unidas. Otra idea potencialmente ligada a la anterior era la de reestructurar el orden económico para permitirle al Sur un mayor acceso —el Nuevo Orden Económico Internacional. La Nueva Derecha, sin embargo, propugnaba un tercer programa: monetarismo, expulsión del sindicalismo de la posición de fuerza disfrutada en el orden de la posguerra, debilitamiento de la influencia del Sur y vuelta a la subordinación de éste al núcleo capitalista. Fue este programa el que consiguió

la preeminencia cuando al final de los años setenta las administraciones Reagan y Thatcher fortalecieron su poder.

El programa de los Estados Unidos

Este programa estaba fuertemente condicionado por los intereses estratégicos nacionales estadounidenses por asegurarse que el movimiento hacia un nuevo orden internacional de acumulación se inclinaba hacia una reconstrucción de la hegemonía del capitalismo americano. En este contexto, tres aspectos de la estrategia estadounidense eran especialmente relevantes: el nuevo sistema monetario, que empezó a ser construido en los años setenta; la correspondiente campaña para dismantelar los controles del capital permitiendo el libre movimiento de las finanzas y, en tercer lugar, un nuevo orden transnacional de derechos de propiedad, al que la administración Reagan dio forma con ocasión de la Ronda Uruguay.

El nuevo orden monetario suponía la imposición del dólar, libre de las disciplinas de Bretton Woods, como moneda internacional, acompañada por tipos flotantes de cambio entre las diferentes monedas. Los tipos de cambio ya no dependerían del comercio sino de la relación crédito/deuda y, así, sus movimientos estarían influidos principalmente por las actividades de operadores privados en el mercado financiero. Puesto que el mayor de estos mercados era y es el estadounidense (con Londres como satélite) y puesto que el Tesoro y la Reserva Federal de los Estados Unidos podían reorientar incentivos en los mercados de EE.UU., el Tesoro norteamericano ha tenido oportunidad de hacer oscilar los tipos de cambio entre un dólar bajo y un dólar alto en una medida históricamente sin precedentes, según lo requiriera cíclicamente la estrategia de las economías nacional e internacional del país.

Este orden del dólar de Wall Street ha tenido un tremendo efecto transformador sobre la economía política internacional. En respuesta a los pasos americanos para establecer este orden en los setenta, los estados de la Unión Europea construyeron el sistema monetario europeo para crear una zona de estabilidad de los tipos de cambio en Europa —paso crucial hacia la regionalización de la economía europea en los años ochenta y noventa—, promoviendo el comercio intra-europeo y convirtiendo así la economía europea en una economía progresivamente cerrada, saliendo al paso de los avatares de la globalización.

El nuevo orden monetario estadounidense introdujo, además, capital japonés para adoptar una nueva estrategia de regionalización, desplazando gran cantidad de capacidad productiva hacia las economías ligadas al dólar del Este y el Sudeste asiáticos mediante políticas de bajada del dólar frente al yen, en los últimos ochenta y primeros noventa. Esto dio lugar al aumento de los esfuerzos japoneses durante los noventa por construir un bloque regional, esfuerzos frustrados por el gobierno de los Estados Unidos.¹⁰ El resultado es un patrón japonés de acumulación que sigue siendo inseguro.

Necesitamos también este contexto de manipulación de los tipos de cambio imperantes para entender las presiones ejercidas sobre las empresas de las tres regiones para que penetren en las jurisdicciones de los otros centros triádicos. Depender sólo de las exportaciones no es, sencillamente, una estrategia viable cuando el dólar puede valer el doble o la mitad, frente a otras monedas, en intervalos de tiempo muy cortos.

La volatilidad de los tipos de cambio es también la razón principal del impactante crecimiento de la actividad en el mercado de divisas y sus derivados. El ingente crecimiento en volumen de negocios en estos mercados es esgrimido con frecuencia como un signo del gran dinamismo del sector financiero, que incluso impide el crecimiento de las posibilidades financieras de los gobiernos. El origen de tal dinamismo, empero, radica de hecho en la históricamente anormal inestabilidad del orden monetario, que fuerza a los agentes económicos a contratar pólizas de seguros contra las fluctuaciones en los tipos de cambio, mientras anima a otros a especular en esos mercados.

Si el orden monetario se ha revelado fundamental para explicar muchos de los fenómenos atribuidos a la «globalización», también lo ha sido el programa norteamericano Ronda Uruguay. Éste consistía en una serie de exigencias de cambios en las instituciones político económicas, principalmente «tras las fronteras» de los estados, en lo que respecta a los derechos de los agentes extranjeros dentro de otras economías nacionales. Muy significativamente, estaba diseñado para proteger las rentas monopolísticas de las empresas norteamericanas de la información, mediante un nuevo orden de derechos de propiedad intelectual. Estaba articulado también para que las compañías estadounidenses del sector servicios penetraran en otros países y establecieran operaciones con «derecho a tratamiento nacional». Esta serie de exigencias se combinaba con un despliegue de nuevos instrumentos estadounidenses para librar una guerra comercial contra aquellos países que, supuestamente, actuaran contra los intereses de las empresas norteamericanas: medidas como la *Super 301*, la *Special 301*, la manipulación de acciones *anti-dumping* y otras medidas encaminadas hacia un comercio dirigido, es decir, hacia lo que Bagwati ha llamado «unilateralismo agresivo» de EE.UU. en asuntos de comercio y de economía internacional.

Estos aspectos del programa de Reagan tuvieron por respuesta en la Europa Occidental, en primer lugar, el Programa de Mercado Único para conseguir la clase de economías de escala que los negocios norteamericanos disfrutaban. En segundo lugar, la Unión Europea desarrolló un gran número de instrumentos mercantilistas que fueron utilizados no tanto contra los Estados Unidos como contra la competencia de Japón y el Este de Asia y, más adelante, para imponer los intereses económicos de la UE en Europa del Este y Centro-Este. Estas iniciativas de la Unión Europea aceleraron los pasos de los Estados Unidos hacia el NAFTA.

Semejantes desarrollos del comercio y los derechos de propiedad han re-

forzado a su vez las tendencias a la regionalización y al crecimiento de la inversión extranjera directa en la tríada para que cada región tome posiciones en los otros dos mercados.

El programa general del núcleo capitalista para reorientar las relaciones de clase internas

Estas iniciativas norteamericanas, dirigidas a restaurar el dominio de su país, se han combinado con un movimiento transnacional, en el ámbito capitalista avanzado, hacia la reorganización de las relaciones de clase internas, en beneficio de las clases nacionales propietarias y de la dimensión rentista del capitalismo. Este movimiento generalizado, que comenzó en los Estados Unidos en los setenta y se propagó por el resto del ámbito occidental, da prioridad a la reducción de la inflación, permite la reaparición de grandes bolsas de desempleo, mantiene bajos los salarios, socava la estabilidad del empleo y crea un clima favorable a las «reestructuraciones» y a las reducciones de plantilla.

Esta ofensiva para transformar la relación capital-mano de obra en los países de capitalismo avanzado, que suele ser explicada en términos de presiones de la competencia internacional, se presta más a ser interpretada como un cooperativo giro estratégico por parte de los países hegemónicos. Este giro habría desviado la búsqueda de la restauración del beneficio, que partía de una lucha en la que cada uno de los tres centros regionales perseguía el hacerse con una cuota de mercado en los otros dos, hacia un esfuerzo común por reavivar el nivel general de beneficios, en una batalla suma-cero con las clases trabajadoras nacionales. Desde los primeros ochenta, la coordinación intelectual de este giro fue asumida por la OCDE y el G7. En el contexto de la Europa continental, el vehículo elegido por los gobiernos nacionales para llevar a cabo este giro fue el conjunto de las instituciones para la integración europea. El Sistema Monetario Europeo (SME) y el Mercado Común resultaron ser instrumentos cruciales.

Así, el SME no sólo actuó como un escudo frente a las fluctuaciones de los tipos de cambio en el nuevo sistema monetario centrado en el dólar, sino que también sirvió como instrumento para imponer una nueva política monetarista dentro de los estados miembros. Era, por tanto, un mecanismo primordial para reorganizar las relaciones capital-mano de obra en el interior de cada estado. Al convertirse el Sistema Monetario Europeo en la base del movimiento hacia la moneda única, revistió cada vez más poder en la campaña por el cambio social, generando así «criterios de convergencia» para el atrincheramiento fiscal, para la reducción de la deuda pública y para unos objetivos de inflación más ajustados.

El Programa del Mercado Común presenta también este carácter dual. Por un lado, ha sido un instrumento para conseguir economías de escala y que así las compañías multinacionales europeas fortalecieran su base de mercado, con

vistas a un alcance internacional. Por otro, ha actuado también como un medio para reorganizar las relaciones de clase en el interior de los estados miembros, bloqueando las presiones políticas ejercidas por los trabajadores, y modificar los poderes del capital sobre ellos, en el marco legal supranacional de las leyes del libre mercado. Al mismo tiempo, el Mercado Común desempeñó el papel fundamental de legitimador del final de los controles sobre el capital. Legitimó también las ofensivas de privatización a escala de la Unión Europea, para generar, en igualdad de condiciones, ámbitos de juego mercantil, en áreas que anteriormente estaban ocupadas, en su mayor parte, por organizaciones estatales industriales. Así, estos dos mecanismos actuaron para liberar a los estados miembros de sus compromisos anteriores respecto a los ciudadanos en un amplio espectro de obligaciones sociales.¹¹

De este modo, el papel de la Unión Europea a la hora de vaciar la democracia europea de contenido social ha sido complejo. Las concepciones ideológicas de la «globalización económica» mistifican esta complejidad, generando un debate sobre si la UE ha actuado como barrera o como mecanismo transmisor de la «globalización» —un significante flotante sin referente seguro. La Unión Europea ha sido un escudo frente a la turbulencia del orden monetario establecido después de los setenta, y frente a las presiones de la competencia del sureste asiático. Ha constituido también una póliza de seguros contra el unilateralismo agresivo de los Estados Unidos. Pero, simultáneamente, ha funcionado también como un poderoso mecanismo para reorganizar las clases sociales en el seno de cada estado miembro. Este mecanismo de reorganización social ha socavado en distintas maneras los compromisos sociales del estado y ha fortalecido el poder del capital sobre la mano de obra. Y si la Unión Europea ha desempeñado estos papeles es porque los gobiernos nacionales de los países miembros han decidido usarla para estos propósitos. Además, no sólo los ha llevado a cabo a través de sus instrumentos legales de actuación política, sino también mediante su poderoso papel simbólico como vehículo para la unión de Europa. Este papel simbólico de unión ha sido una potente fuente de energía política, especialmente con respecto a la Izquierda Europea, dado su fuerte compromiso de superar los particularismos nacionales.¹²

Liberalismo transnacional contra democracia social

De este modo, ha quedado sin fuerza el argumento de que los procesos y flujos transnacionales del mercado (macroeconomía liberal) o las compañías transnacionales (microeconomía liberal) han transformado las condiciones estructurales de los países capitalistas avanzados, y que han requerido vaciar la democracia social del estado de bienestar. Las transformaciones sociales de las relaciones estado-mercado a lo largo de las dos últimas décadas han de ser comprendidas

como el producto de una acción estratégica, en el nivel estatal, para reestructurar tanto los mercados como los estados. La perplejidad surge entonces respecto a dónde puede residir la agencia de esta estratégica transformación. Y la búsqueda habrá de devolvemos al propio interior de las sociedades de los estados de capitalismo avanzado.

Está sobradamente probado que en todos estos estados existen poderosos, aunque minoritarios, grupos sociales fuertemente implicados en la reorganización tanto de los estados como de los mercados. Su compromiso con estas transformaciones es proporcional a los beneficios materiales que han obtenido de ellas. Las ganancias han sido más impactantes en el mundo anglosajón, donde el 10 % más rico de la población ha sacado un extraordinario provecho material de estos cambios. Estas ganancias, no obstante, se han dado en todos los países de la OCDE.

El empuje político que ha conducido la transformación social se ha nutrido de recursos ideológicos que ya estaban incorporados en los propios estados liberal-democráticos, en concreto dentro del componente liberal de la democracia liberal.

Tanto histórica como teóricamente, el componente liberal de la democracia liberal está en tensión con el componente democrático. Hoy en día, lejos de estar en crisis, el componente liberal se halla en ascenso, y su propio ascenso está, en efecto, estrechamente relacionado con la crisis de la democracia.

Históricamente, en Francia, Italia, Gran Bretaña y otros países, el liberalismo decimonónico contaba entre sus filas a algunos de los más resueltos detractores del sufragio universal. Y las principales corrientes actuales del pensamiento liberal sitúan los derechos y libertades liberales del individuo —enaltecidos en la jurisprudencia constitucional y mantenidos por órdenes judiciales—, *por encima* de la soberanía popular y de la voluntad democrática. Dentro del pensamiento liberal no existe necesariamente una conexión entre políticas públicas y voluntad democrática. El liberalismo sí valora un vínculo entre un debate público libre e informado y las políticas públicas, pero no asume ninguna relación forzosa entre la voluntad mayoritaria y las mejores realizaciones políticas: más bien al contrario.

Además, en su encarnación del individualismo, el liberalismo es típicamente hostil al compromiso del estado con cualquier concepción excesiva de la buena sociedad. En sus versiones hayekiana u oakshottiana, tan de moda ahora, tales concepciones del estado, como empresa colectiva encaminada a un objetivo, son sin duda el primer y decisivo paso hacia variantes de la «servidumbre» o del totalitarismo. El estado, según este punto de vista, debería verse libre de todo compromiso u obligación social, y debería actuar, en palabras de Oakshott, como una asociación civil, un marco socialmente neutro de ley y orden. Marco en el que todas las metas humanas pudieran ser perseguidas libremente por individuos sujetos a la limitación de no interferir con la libertad de otros individuos en la prosecución, asimismo, de sus propias metas.

El *revival* de esta política liberal individualista por parte de la Nueva Derecha Anglo-Americana al principio de los ochenta apuntaba precisamente a todas las variantes de colectivismo social: no sólo al comunismo sino también a la democracia social y a las varias clases de modelos de desarrollo estatista o colectivista en el Tercer Mundo. El ataque liberal fue llevado adelante no sólo en el plano de la lucha por la libertad individual de elegir metas contra la dictadura del estado, sino también en el de los criterios liberales (tanto neoclásicos como hayekianos) de eficacia económica. Según tales criterios, el mercado libre es óptimamente eficiente, y la implicación del estado es percibida como un ejercicio de búsqueda de rentas por parte de intereses específicos.

En el marco de estos términos, con una notable excepción, no hay crisis de la democracia liberal en cuanto a la teoría normativa: los estados occidentales siguen tan democráticos como exigen los criterios liberales. Y, en efecto, se están volviendo más *liberal-democráticos*, con el creciente acento puesto sobre la importancia de los derechos individuales, articulado con frecuencia en el lenguaje de los derechos humanos liberales del individuo. Este énfasis en alza se plasma en la sensibilidad existente en Europa hacia la Corte Europea de Derechos Humanos y sus decisiones.

Esta ofensiva liberal se ha extendido ampliamente durante los ochenta y los noventa desde su centro anglo-sajón al resto de la OCDE. Philippe Schmitter ha resumido esta tendencia dominante y la ha conceptualizado como la oposición entre liberalismo y democracia, cuyo desarrollo futuro él ve en los siguientes términos: «[...] veremos más liberalismo —e (implícitamente) menos democracia: privatización de empresas públicas; supresión de regulaciones estatales; liberalización de los flujos financieros; conversión de las exigencias políticas en demandas basadas en derechos; sustitución de derechos colectivos por contribuciones individuales; sacralización de los derechos de propiedad; reducción de las burocracias y emolumentos públicos; descrédito de los “políticos” en favor de los “empresarios”; aumento del poder de las instituciones “técnicas neutrales”, tales como bancos, a expensas de las “políticamente parciales”. Todas estas modificaciones tienen dos características en común: en primer lugar, aminoran las expectativas populares respecto a lo públicamente elegido, y, en segundo, hacen mucho más difícil reunir mayorías que puedan superar la resistencia de las minorías, especialmente de las privilegiadas y bien atrincheradas». Schmitter recalca que las democracias liberales avanzadas más expuestas a la estrategia de «más liberalismo» han tendido hacia un declive proporcional en la participación electoral, en la afiliación sindical, en el prestigio de los políticos, en el interés ciudadano por los asuntos públicos, en la percepción del papel de la legislatura, en la medida y la intensidad de identificación con los partidos y en la estabilidad de las preferencias electorales. Por el contrario, han conocido el aumento del número de procesos judiciales, escaladas de las acusaciones de corrupción y proliferación de las candidaturas anti-partidos. La pregunta crucial

es, justamente, si este proceso de «desdemocratización» puede continuar. Su justificación reside casi exclusivamente en el superior rendimiento económico que, se supone, corresponde a un sistema liberalizado de producción y distribución, junto con el esfuerzo deliberado por promover un fuerte rechazo normativo de la política como tal.¹³

Descontento transnacional

El desafecto respecto a esta tendencia liberal o, como se la suele llamar, neoliberal, presenta ahora mismo en Gran Bretaña formas avanzadas. Se ha producido una abstención electoral a gran escala y también un evidente abismo entre, por un lado, valores populares que permanecen fuertemente apegados a una mayor igualdad y seguridad social y, por el otro, un discurso público dominante liberal. Se pone de manifiesto en una gran cantidad de síntomas de declive social e institucional: la recurrencia desde los primeros ochenta de disturbios urbanos que implican a los pobres, el galopante aumento del crimen de todo tipo y otras señales de profunda desmoralización social, sobre todo entre los jóvenes. Hay, además, una propensión a movimientos espontáneos de protesta que los principales partidos e instituciones políticas difícilmente pueden controlar. Así, por ejemplo, la ola de huelgas francesa de 1995, la elección de Ken Livingstone como alcalde de Londres, las protestas contra los precios e impuestos de la gasolina en Gran Bretaña en otoño del 2000, y el dramático descenso en participación electoral en las elecciones generales británicas de 2000. Estos fenómenos pueden todos ellos ser vistos como síntomas de dicho malestar. Otro síntoma lo encontramos en el aumento de la xenofobia y en el de los partidos de extrema derecha, desde principios de los ochenta, en algunas partes de Europa.

Estos signos de malestar, sin embargo, no producen verdaderas crisis políticas. Las señales descritas anteriormente pueden ser miradas desde un punto de vista diferente: como una transición en Europa hacia una política liberal de estilo estadounidense. Según esta lectura, el descenso en participación electoral en, digamos, Gran Bretaña, aún le deja a esta nación unos niveles de participación mayores de los habituales en Estados Unidos. Las revueltas, la criminalidad y la drogadicción pueden ser abordadas mediante prácticas políticas americanas: en efecto, estas prácticas han ido resultando crecientemente atractivas en Gran Bretaña. Aunque este país tiene la población penitenciaria más alta de Europa, aún queda muy por detrás de la de Estados Unidos. El actual gobierno de Blair cree, evidentemente, en un *workfare state* coactivo schumpeteriano —en el que los pobres no tienen otra opción que aceptar trabajo a muy bajo salario junto con ayuda— para re-imponer a los pobres disciplina social. En el blairismo la concepción del papel del estado, estrecha y exclusivamente liberal,

consiste en igualdad de oportunidades y mínima provisión de bienestar. Las barreras al acceso a las instituciones políticas nacionales que encuentran los nuevos partidos, erigidas por el sistema electoral del británico del «primero que llega» (en el que un partido minoritario tiene que conseguir ser el primero en su distrito electoral para conseguir representación parlamentaria), otorgan a los principales partidos una gran seguridad. Por tanto, en el caso británico, la perspectiva de una transición hacia un liberalismo americano plenamente desarrollado es, quizá, factible. Es, empero, también políticamente arriesgado, ya que genera tensiones en las filas nacionales dentro del Reino Unido y la amenaza de revueltas populares de varias clases. Estos problemas serían probablemente mucho más graves en un país como Francia, no digamos ya en los países escandinavos.

Antes de examinar posibles maneras de reavivar el estado de tipo social-democrático, consideraremos brevemente los rasgos específicos de la democracia liberal fuera del núcleo capitalista.

Segunda parte. El malestar de la democracia liberal fuera de los países del núcleo

El sino de las democracias de zonas como el centro-este y el este de Europa o Latinoamérica ha sido sustancialmente más difícil que el de los países del núcleo democrático-liberal. En efecto, a las democracias no nucleares no les ha sido posible dar forma a su entorno político-económico. Los estados del núcleo son los que crean el orden: los estados periféricos son los receptores del orden. Podemos tomar la experiencia de la Europa del este y centro-este en los años noventa como ejemplo de las consecuencias de esta debilidad internacional.

Esta región experimentó una rápida transición a la democracia al final de los noventa, pero desde entonces ha conocido intensas tensiones sociales, poderosas presiones de la Europa occidental y crisis y estancamiento económicos. La región entera, excepto Polonia, en términos de PIB *per cápita*, ha caído aún más por debajo de la mitad occidental del continente. Al mismo tiempo la región se ha dividido en varias zonas radicalmente diferentes desde el punto de vista económico y político. Examinaremos, brevemente, dos de estas zonas: el grupo de estados que limitan con Alemania y Austria, que llamaremos cinturón fronterizo, y los estados del sudeste europeo.

Declive y regresión en el sudeste europeo

La brecha que se ha abierto entre el sudeste y el cinturón fronterizo desde 1989 suele ser explicada recurriendo a divisiones histórico-culturales profundamente arraigadas entre «los Balcanes» y la Europa central cristiano-occidental. Sería necesario, sin embargo, reconocer los verdaderos mecanismos que han generado esta brecha en los noventa, para comprender la dinámica actual en cada región. Los siguientes mecanismos han sido particularmente importantes:

1. El enfrentamiento entre las tendencias políticas locales y la campaña occidental de «tratamiento de choque» lanzada en 1989.
2. El impacto de las prioridades geopolíticas alemanas en ambas regiones.
3. El impacto de las guerras yugoslavas.
4. La ruptura de Albania

Examinaremos rápidamente cada uno de estos factores.

1. «Tratamiento de choque» y fuerzas políticas locales

A partir del verano de 1989, los poderes occidentales hicieron campaña por un rápido cambio de los sistemas sociales del este hacia un capitalismo de orientación occidental, en torno a un sistema de mercado, a grandes rasgos, libre. En un principio, este movimiento resultó aceptable, en gran medida, a las élites sociopolíticas emergentes y a las poblaciones de lo que se llamó cinturón fronterizo; sin embargo, chocó con las orientaciones sociopolíticas de los grupos poderosos del sudeste.

En los países del Este que limitan con Alemania y Austria, en las primeras elecciones democráticas, los partidos comunistas o post-comunistas se revelaron como una pequeña minoría, con unos porcentajes de voto de entre 10 % y 16 %. Estos partidos eran también minoritarios, al principio, en los países bálticos. Sin embargo, en el sudeste, los partidos de izquierda eran mucho más fuertes. Eran mayoritarios en Rumanía, Bulgaria, Serbia y Montenegro, y considerables en Macedonia y Croacia.

Siguiendo estos resultados electorales, los gobiernos de Polonia, Checoslovaquia y Hungría aceptaron el programa de rápida realineación social (el gobierno del MDF húngaro era el más reacio), como también hizo, de hecho, el gobierno federal yugoslavo, que acometió un «programa de choque» draconiano antes de las elecciones. Pero los gobiernos rumano y búlgaro, elegidos en 1990, no aceptaron dicho programa: dieron prioridad a la reanimación económica sobre el cambio de sistema social. También dieron preferencia a los lazos económicos con la URSS, socio fundamental para Bulgaria, en particular. Estas políticas atrajeron hostiles presiones occidentales. Pese a que las elecciones de

1990 en Bulgaria y Rumanía fueron consideradas limpias por los observadores internacionales, los poderes occidentales declararon no democráticos a los nuevos gobiernos y les negaron apoyo y ayuda. Esto generó un intenso conflicto político interno, al formarse coaliciones de partidos y grupos anticomunistas que buscaron apoyo en Occidente para desbancar a los partidos dominantes.

Esta polarización fue seguida de un retroceso en los países que habían implementado el «tratamiento de choque». Dicho retroceso se debió a las salvajes depresiones internas en estos países y constituyó toda una prueba de fuego para su cohesión política. Polonia y Hungría tenían amortiguadores eficaces para controlar el retroceso: la gente se volvió hacia los partidos postcomunistas en esos dos países, pero estos partidos estaban a su vez comprometidos con la campaña de realineación.

En Checoslovaquia y Yugoslavia, empero, no se pudo mantener la cohesión. La separación entre las tierras checas y Eslovaquia fue pacífica. Sin embargo, en Yugoslavia el programa de «tratamiento de choque» de 1990 del Fondo Monetario Internacional interactuó con la configuración sociopolítica de fuerzas para provocar el colapso, primero, del programa, después, el colapso del gobierno de Markovic y, a continuación, del estado.¹⁴ El Programa de Choque del FMI y del Banco Mundial en Yugoslavia —el primero de la región— era particularmente draconiano, ya que suponía no sólo depresión económica sino también cierres masivos de fábricas —una táctica que no se intentó repetir más adelante.¹⁵ Aunque el primer ministro Markovic era mucho más popular, con diferencia, que ningún otro líder del país o de cualquier república, su programa dio lugar a una creciente resistencia popular. Se impidió que convirtiera su respaldo personal en un mandato democrático. Las elecciones, en cambio, se organizaron sobre una base puramente republicana. Y los diversos partidos políticos utilizaron muy eficazmente la oposición al programa FMI-Markovic para conseguir resultar elegidos.¹⁶

En Eslovenia y Croacia, los líderes nacionalistas se opusieron al programa para ganar apoyo en orden a sus objetivos separatistas. En las repúblicas del sur, las más seriamente afectadas por los cierres de fábricas, las fuerzas políticas dominantes —comunistas— se opusieron también al programa, mientras buscaban mantener la unidad yugoslava.

Así, las fuerzas nacionalistas yugoslavas pro-occidentales fueron destruidas, y la batalla pasó a tener lugar entre, por un lado, la izquierda anti-occidental partidaria de Yugoslavia, liderada por el Partido Socialista de Serbia, y, por el otro, los separatistas pro-occidentales que buscaban la destrucción de Yugoslavia, y que pronto consiguieron un fuerte respaldo de Austria y el Vaticano, primero, y de Italia y Alemania después.

De este modo, Europa del Este empezó a dividirse en un cinturón fronterizo que pronto incluiría a Eslovenia, y un sudeste compuesto por las excluidas Rumanía y Bulgaria y por una Yugoslavia en desintegración.

2. *El impacto de las prioridades geopolíticas alemanas en la región*

Otro importante factor que contribuyó a la diferenciación fue el que Alemania marcara desde muy pronto una clara geopolítica en la región: priorizar el interés por el cinturón fronterizo y desentenderse prácticamente de lo que ocurriera en las partes más remotas. El Canciller Köhl dio a conocer muy pronto a los gobiernos de Polonia, Checoslovaquia y Hungría su determinación de llevarlos rápidamente hacia la pertenencia a la Unión Europea. Manifestó al Primer Ministro húngaro, por ejemplo, que planeaba la admisión de Hungría para 1996.¹⁷ Estas señales por parte de Alemania concernían a los países del *Visegrad* y, desde principios de 1991, también a dos repúblicas yugoslavas: Eslovenia y Croacia. Pero no fueron extensivas al resto del sudeste. La importancia de esta orientación alemana para la diferenciación de la zona en dos regiones no debe ser subestimada. Pese a las enormes tensiones que el cinturón fronterizo hubo de confrontar en los primeros noventa, sus élites recibieron por parte de Alemania la oferta de una clara estrategia nacional. Esta perspectiva estratégica no fue ofrecida a las élites de los países del sudeste.

3. *El impacto de las Guerras Yugoslavas*

Una vez las tensiones en el seno de Yugoslavia estallaron en guerra abierta en el verano de 1991, todo el resto del sudeste europeo, salvo Eslovenia, resultó afectado por las repercusiones de los acontecimientos en los Balcanes occidentales. Las sospechas y rivalidades intra-occidentales sobre la estructura de poder en la Europa post-Guerra Fría provocaron entonces que los Estados Unidos empujaran al gobierno de Bosnia a una guerra civil, y que sabotearan los esfuerzos de la Unión Europea por resolver el conflicto, con devastadores resultados para los Balcanes occidentales.¹⁸ El subsiguiente colapso de Albania y el ascenso del KLA en Kosovo se combinaron entonces con la campaña de la administración Clinton para consolidar la nueva OTAN —y, por tanto, el liderazgo de Estados Unidos en Europa Occidental. El resultado fue la guerra de la OTAN contra Yugoslavia, que ha producido una nueva serie de problemas en la región (y más allá).

Mientras se desarrollaban estos acontecimientos en los Balcanes Occidentales, la situación social en Bulgaria y en Rumanía había sufrido un agudo deterioro. La inicial hostilidad de Occidente hacia los gobiernos de izquierda de estos dos países dio paso a la preocupación por la estabilidad, mientras las guerras bosnia y croata seguían su curso. Sin embargo, siguiendo a Dayton, el FMI adoptó una nueva actitud dura respecto a Bulgaria, en 1996, por no haberse movido con suficiente rapidez hacia la privatización. La suspensión de los créditos por parte del FMI en combinación con la extrema vulnerabilidad del sistema bancario búlgaro provocaron un colapso bancario y monetario a gran

escala. Esta catástrofe tuvo como efecto la destrucción de la autoridad del gobierno socialista, pero la economía búlgara aún no se ha podido recuperar, y esto ha socavado a su vez la autoridad de la Coalición de Centro Derecha. Como resultado, en las elecciones de 2001, el voto más numeroso ha sido para el ex rey de Bulgaria, quien se presentó sin ningún programa definido, pero ha sido apoyado y esperado como un salvador por una amplia y desesperada parte del electorado. En Rumanía, el Partido Socialista en el gobierno perdió las elecciones de 1996 y fue sustituido por una coalición de centro-derecha, comprometida con un programa extremadamente radical de «tratamiento de choque» y austeridad. La economía entró en una depresión de la que tampoco se ha recuperado, se ha fragmentado la coalición en el gobierno, y todo esto ha conducido al regreso del Partido Socialista al gobierno, en las elecciones de 2000. Estas elecciones también han traído un fuerte desafío por parte de un partido populista de derecha nacionalista y anti-occidental.

La «europeización» del cinturón fronterizo

Los estados del cinturón fronterizo se han librado, en gran medida, de la regresión del sudeste. Pero han tenido que vérselas con dos reorganizaciones sociales de imponente alcance durante los noventa. Se trató, primero, de la particular forma de transformación de clase que la realineación del «tratamiento de choque» implicaba. Pese a estar legitimado el «tratamiento de choque» como una iniciativa en favor de la eficacia económica, en realidad tenía más que ver con un cambio de las estructuras sociales de estos países en una dirección particular. La ideología legitimadora insistía en que los problemas de las economías de Europa del Este radicaban más en sus sistemas socio-institucionales que en asuntos como deuda, exclusión de los mercados mundiales, de sistema cultural, o bien de motivaciones en el orden político. Recalcaban, por lo tanto, que una destrucción radical de los sistemas de planificación central, y la introducción de mercados libres para todos los factores de producción, llevarían a una reasignación de los factores de producción en términos de mercado. Asimismo, conllevarían un salto hacia una eficacia redistributiva muchísimo mayor y hacia un crecimiento mucho más rápido de lo que nunca se consideró posible bajo la planificación central.

Esto resultó ser cruelmente ilusorio. La realineación de choque no produjo tal resultado: en su lugar, la región se hundió, en 1990-1992, en un desplome económico sin precedentes en tiempos de paz. El FMI combinó iniciativas para generar tal recesión con un crecimiento orientado a la exportación muy en la línea de los programas estructurales de Reajuste latinoamericanos. Sin embargo, en el caso latinoamericano, el poderoso sector bancario de los Estados Unidos había abierto un acceso a los mercados estadounidenses para los productos lati-

noamericanos: quería ver pagadas las deudas de estos países. La situación europea era distinta. En medio de este hundimiento, la Unión Europea reveló tener preocupaciones muy diferentes de las de Estados Unidos respecto a la Latinoamérica de los ochenta. La motivación de la UE se basaba en lo que podríamos llamar un mercantilismo industrial y agrícola: usar la fuerza de la palanca política para maximizar sus exportaciones al este y minimizar la competencia de los productores del este en sus propios mercados internos. De esta manera, un programa de «tratamiento de choque» de inspiración americana condujo a las economías de Europa del Este hacia una campaña de exportación que la Unión Europea no estaba dispuesta a aceptar.

Esta actitud quedó demostrada en los Acuerdos Europeos de la UE. Dichos acuerdos dejaban patente que la función del este consistía, en efecto, en cubrir las necesidades de los capitales existentes de la Unión europea. Esto significó una reestructuración masiva del aparato productivo del Este para encajar con las demandas del capitalismo europeo occidental.

Este programa de la UE fue revelado a principios de 1990, justo en el momento de mayor dependencia de estos estados respecto al mercado de la Unión, ya que estaban tocando el fondo de la depresión. El borrador de los Acuerdos Europeos causó una conmoción a los gobiernos de la región y puso en un dilema incluso a los más entusiastas de la realineación.

El programa de «tratamiento de choque» se había granjeado muchos apoyos entre las nuevas élites de los estados del cinturón fronterizo, puesto que les ofrecía un fuerte respaldo internacional a su campaña interna hacia la construcción de nuevas sociedades capitalistas. Pero la revelación de la postura de la Unión Europea produjo indignación. Los gobiernos del cinturón fronterizo consideraron la posibilidad de romper las negociaciones con la UE y denunciar el lote completo como un ultraje mercantilista. En abril de 1991, el comisario Anderssen, encargado de llevar a cabo la política de la Unión respecto al Este, informó al Consejo de Ministros de que las negociaciones estaban en punto muerto y al borde del colapso.¹⁹ Pero, a cambio de unas mínimas concesiones por parte de la UE, los estados del cinturón fronterizo decidieron aceptar los términos de la vía hacia la integración.

No tenían, en realidad, mucha más opción que aceptar lo que la Unión quisiera ofrecerles, ya que habían justificado el viraje hacia el capitalismo y sus nuevos derechos a la propiedad como un giro hacia «Europa». Denunciar entonces a Europa no era internamente una opción seria. Y había, por otra parte, un segundo argumento para aceptar los Acuerdos: la fuerte y clara evidencia de que Alemania tenía un vital interés, nacional y político, en atraer al cinturón fronterizo hacia relaciones políticas que conducirían finalmente a la integración en la Unión. Esto no significaba en absoluto que Alemania ejerciera fuerza a la hora de atemperar los términos político-económicos de los Acuerdos Europeos. Al contrario, el gobierno alemán fue tan duro como el francés respecto a los

términos económicos. Pero la vertiente política de la política seguida por Alemania constituía un poderoso argumento para aceptar los términos de los Acuerdos Europeos. Y el argumento definitivo contra el rechazo era que se trataba de una opción demasiado arriesgada para unas economías que dependían desesperadamente de mantener el acceso al mercado de la Unión.

La evolución económica del cinturón fronterizo

En términos cuantitativos, las economías del cinturón, a excepción de Polonia, se han alejado más del PIB *per cápita* europeo occidental desde 1989. Los esperados beneficios que permitirían alcanzarlo al girar hacia la economía capitalista no se han materializado aún. Los patrones estadísticos de divergencia reflejan no sólo la depresión por la transformación sistémica de 1990–1993 sino también su continuación en el período 1993–1999.

<i>País</i>	<i>Porcentaje de PIB per cápita respecto a UE en 1989</i>	<i>Porcentaje PIB per cápita respecto a UE en 2000 (proyección)</i>
República checa	64,9	56,3
Hungría	56,7	52,9
Polonia	38	39,9
Eslovaquia	56,7	56,3

Fuentes: UNECE, «Catching Up and Falling Behind: Economic Convergence in Europe», *Economic Survey of Europe*, n.º 1 (2000). Ivan T. Berendt, «From Plan to Market», «From Regime Change to Sustained Growth in Central and Eastern Europe».

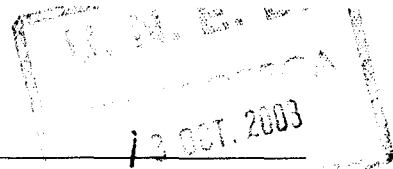
En cuanto a las posibilidades que tiene el cinturón fronterizo de salir de este patrón de periferalización económica durante la próxima década, y de experimentar un crecimiento constante superior al de la UE, tales posibilidades dependen de que puedan librarse de los bloqueos estructurales y de las vulnerabilidades a los que ahora se enfrentan. Las actuales tendencias no son muy halagüeñas, debido a que muchos de estos bloqueos derivan precisamente del orden de la Unión Europea, al que han de adaptarse forzosamente. Esto genera procesos de declive agrícola en el Este,²⁰ además de des-industrialización, mientras que impone graves coerciones legales a las posibles opciones políticas de las que puedan disponer los gobiernos del cinturón fronterizo para combatir estas tendencias.

El potencial crecimiento de estas economías parece estar constreñido por un número de factores que les impiden conseguir ritmos de crecimiento que

permitan alcanzar a los de la Unión. En primer lugar, se presentan como economías dependientes del comercio, cuyo crecimiento depende del de la UE. En segundo lugar, tienden a padecer déficits, con respecto a la Unión, crónicos y a veces peligrosamente agudos. Estos son generados, en gran medida, por las restricciones comerciales de la Unión, por las importaciones de bienes de consumo y de *inputs* para las fábricas de propiedad occidental implantadas en el este; y son provocados por las políticas comerciales de la UE, que paraliza las exportaciones en sectores clave de la economía del este mientras subvenciona y promueve las exportaciones de los estados de la Unión hacia esta región. Si a esto añadimos la obligación de cubrir las deudas, onerosas en muchos de estos estados, sus cuentas corrientes se quedan crónicamente amenazadas. Una tercera fuente de vulnerabilidad reside en el frágil sistema bancario de la región, resultado en gran medida del (correcto) intento por parte de los gobiernos de preservar los activos industriales durante la depresión de los primeros noventa, transfiriendo los problemas económicos al sistema bancario bajo la forma de *non-performing loans*. Esto trajo, sin embargo, como consecuencia las dificultades de las empresas industriales para encontrar fuentes baratas de financiación bancaria nacional en orden a sus esfuerzos por reestructurar y aumentar la productividad. La tendencia de los gobiernos a poner sus sistemas bancarios en manos extranjeras puede proteger contra futuros desplomes bancarios, pero no hay garantía de que estos bancos ayuden a las empresas industriales importantes a superar una recesión. Un último factor de vulnerabilidad deriva de las extremadamente volátiles relaciones financieras y monetarias de las que estas economías son presa, gracias al requisito de la Unión de acabar con los controles de capital. Esto permite la entrada en su mercado financiero de oleadas de dinero que elevan los tipos de cambio, generan inflación interna y tienden a preparar déficits comerciales más altos para el futuro. Tales oleadas de dinero «caliente» —que gozan de altos tipos de interés en estas economías (los tipos son nominales para los consumidores nacionales pero reales para los operadores financieros occidentales) y de tipos de cambio en alza para las monedas— pueden invertir de golpe su tendencia, con devastadoras consecuencias locales.

Los estados del cinturón fronterizo no resultan igualmente afectados por estas dependencias/vulnerabilidades. En qué medida han tenido que aceptar presiones de la Unión varía, también, según sus capacidades nacionales. Mediante una reestructuración interna vigorosa y eficaz, que mantuviera al mismo tiempo la cohesión de la élite y el control de las masas, podrían, si pudieran, aumentar su margen de maniobra internacional. La suerte y la táctica en las actuaciones políticas pueden resultar también muy importantes.

A grandes rasgos, la economía más sostenible del cinturón fronterizo es la de Eslovenia. Paradójicamente, es también la menos «globalizada» o «europeizada».²¹ Las razones residen en dos rasgos propios de este país. En primer lugar, como parte de Yugoslavia, tuvo oportunidad de pasar un cuarto de siglo adaptán-



dose a la tarea de exportar a la zona de la UE, puesto que Yugoslavia consiguió acceso a este mercado a finales de los sesenta. En segundo, Eslovenia se libró de la trampa de la deuda yugoslava gracias a la secesión, realizada con apoyo occidental. Carecía, por tanto, del lastre económico y de la presión política que suele acompañar a tales lastres. La economía cuantitativamente más exitosa de la región en los noventa, Polonia, afronta de hecho problemas estructurales muy graves, como un déficit comercial insostenible a la larga, una deuda todavía muy alta (pese a su habilidad sin precedentes para conseguir que la mitad fuera cancelada en los primeros noventa, gracias a sus lazos geopolíticos con los Estados Unidos), y una dependencia muy peligrosa de la afluencia de flujos financieros a corto plazo desde Occidente. Los esfuerzos de la República checa por preservar un sistema productivo de propiedad básicamente nacional fueron derrotados por una devastadora crisis financiera y monetaria en la primavera de 1997. Este tipo de crisis resulta muy familiar dentro de un contexto de países con sistemas monetarios débiles que sucumben demasiado pronto a la presión occidental para que pongan fin al control del capital —la República checa fue la primera de la región en hacerlo. Hungría es el paradigma de una economía que ha sido «globalizada» o «europeizada»: la mayor parte de su sistema industrial ha pasado a ser propiedad extranjera. Esto ha generado exportaciones de algunos sectores de alta tecnología. Ahora bien, un estado de cuentas del sector de propiedad extranjera que mostrara también las importaciones indirectas —además de las directas— y los beneficios repatriados, sugeriría que la «globalización» de Hungría es básicamente sustractora de valor desde el punto de vista nacional. Está generando, por otro lado, los síntomas de una economía dual.

Las economías del cinturón fronterizo, no obstante, tienen de hecho algunas ventajas. Su situación geográfica cercana al corazón las convierte en perfectas para la inversión directa extranjera del tipo «maquiladora».²² En la República checa el coste de mano de obra por unidad era 20.25 % del de Austria en 1997. En Hungría los salarios son impactantemente bajos: 10-15 % de los de Austria. La cifra para Eslovenia es aproximadamente del 30 %.²³ En segundo lugar, en sus sectores industriales, la productividad se ha recuperado y ha aumentado en la segunda mitad de los noventa. En 1998 la productividad, tomando el conjunto de la manufactura de todos estos países, llegaba al 50 % del nivel de Austria, quedando Hungría en cabeza con un 65 %. Además, estos estados dependen mucho menos de la exportación intensiva de mano de obra que Turquía, Portugal o Grecia.

Integración del sistema político en los estados del cinturón fronterizo

Tomando en consideración las enormes presiones que las poblaciones de esta región han experimentado, los sistemas políticos de sus estados se han revelado notablemente estables y robustos. Desde el punto de vista de la Unión Europea,

los mayores riesgos, en estos estados fronterizos, provienen de retrocesos nacionalistas ante la percepción de mercantilismo o imperialismo occidentales. Si se niega a estos estados la entrada en la Unión Europea a corto plazo, estas corrientes nacionalistas se fortalecerán, quizá dramáticamente. Y si el acceso se establece en términos que producen una mayor dislocación económica, estas tendencias se abrirán paso también.

Mientras que algunas de estas corrientes nacionalistas pueden ser descritas como de centro-izquierda o de centro-derecha, otras son de extrema derecha. Esto resulta evidentemente un problema en Hungría, ligado, no hay duda, a la percepción de que los activos del país se han malvendido a los occidentales. También podría surgir en Polonia, donde las tradiciones anti-occidentales siguen siendo importantes.

Igual que en Europa occidental, y básicamente por las mismas razones, relacionadas con las consecuencias sociales de las formas contemporáneas del capitalismo europeo, la xenofobia es un problema en el cinturón fronterizo, en particular respecto a los gitanos y a los rumanos. Este es un grave problema para los estados de la Unión Europea, los cuales, en función de sus propias razones xenofóbicas, no quieren aceptarlos en sus países.

La Unión Europea y la diplomacia occidental buscan apuntalar el liberalismo en el Este

Contra este fondo de crisis económica y social, desplome político y guerra en el centroeste y sudeste de Europa, la Unión Europea ha desarrollado toda una diplomacia coercitiva diseñada para fortalecer la autoridad política de las instituciones estatales afines a los objetivos occidentales en el este. Los estados que violan las normas de la UE en cuanto a democracia liberal y derechos humanos pueden ser sometidos a drásticas sanciones económicas, que pueden llegar a incluir la suspensión del orden de comercio internacional, así como otros tipos de sanciones. Esta vigilancia interna de los derechos humanos y de los *standards* liberales equivale, en efecto, a una pérdida de la soberanía de los estados concernidos: si uno de estos estados fuera hallado culpable de tortura o de implicación en asesinato político, se le aplicaría inmediatamente una dura sanción por parte de la Unión. Por el contrario, uno de sus estados miembros, el Reino Unido, ha sido declarado culpable, precisamente, de tales crímenes en el norte de Irlanda y no ha de enfrentarse a ninguna amenaza de este tipo.

Esta diplomacia de los derechos liberales de la UE se ha convertido, en efecto, en un aspecto absolutamente central de su diplomacia y su «maña» en política exterior durante los noventa. Así, en el mismo momento en que sus estados miembros se encuentran en medio de un significativo malestar democrático, en el que las instituciones de la Unión están profundamente implicadas,

estas mismas instituciones buscan, con bastante éxito, re-legitimarse como paladines externos de la «democracia» —más propiamente liberalismo— y de los Derechos Humanos (liberales) en el extranjero.

Tercera parte. Conclusiones

¿Una vía para salir del malestar?

El argumento de este artículo es que la fuerza generadora del malestar democrático en las democracias avanzadas no reside en una transformación estructural de la economía, enraizada profundamente en la tecnología o en la modernización del mercado. Radica, más bien, en dos fenómenos: en la crisis de los setenta, que fue, a la vez, una crisis económica generalizada y una crisis del liderazgo estadounidense del mundo capitalista, y en el hecho de que fue la derecha capitalista, conducida por las administraciones Thatcher y Reagan, la que tomó la iniciativa y lanzó, por todo el ámbito capitalista, la ofensiva liberal de la Nueva Derecha contra el acuerdo socialdemócrata de la posguerra. Esta campaña se ha granjeado transnacionalmente el apoyo de las clases capitalistas y ha adquirido resonancia ideológica con recursos que ya estaban institucionalmente enquistados en las filas liberal-democráticas de la posguerra: los recursos del individualismo liberal, que siempre estuvo en tensión con el acuerdo socialdemócrata.

El camino hacia la restauración de un desarrollo democrático fuerte pasa primero, y sobre todo, por un asalto a la ideología del individualismo liberal como legitimación ideológica de la polarización social, del empobrecimiento de los sectores más débiles de la sociedad, de la inseguridad de las masas, de la degradación de la vida civil y de la subordinación de los intereses sociales colectivos de la mayoría al aumento de la riqueza y poder privados de la clase propietaria. Una renovación democrática implica la resubordinación de esta clase a los intereses sociales colectivos. Los derechos democráticos que el individualismo liberal reclama como suyos, como la libertad de expresión, de asamblea y de organización no son propiedad exclusiva del liberalismo: están enraizados en los derechos de las mayorías a articular su voluntad social colectiva y a imponérsela a las clases propietarias.

Esta crítica de las consecuencias sociales del individualismo liberal ha de estar ligada a un ataque a las burdas deficiencias del orden económico neoliberal. El sistema monetario internacional actúa como un motor para desestabilizar economías, a lo largo del mundo, en provecho de las estrategias estadounidenses de acumulación de capital. El libre movimiento de las finanzas privadas es hoy, como en el período de entreguerras, un *charter* para especuladores y rentistas que ha tenido devastadoras consecuencias en la economía de un país tras

otro, obsequiando a dos tercios de los miembros del FMI con al menos una grave crisis financiera —y en el caso de algunos, muchas— desde el principio de los noventa.

En este momento, por supuesto, las tendencias patológicas del sistema monetario y financiero internacionales son presentadas como deslumbrantes signos de modernización. Las compañías multinacionales, con su ofensiva por el monopolio de rentas sobre la propiedad intelectual, sus evasiones fiscales a través de las costas, sus manipulaciones de precios mediante comercio intra-empresarial, así como la corrupción y los lazos con el crimen organizado de la banca internacional son saludadas como la fuerza motriz de la modernización. Y la captura del espacio público de la libre comunicación —tanpreciado *en teoría* por el liberalismo— por puñados de compañías mediáticas gigantes no levanta ni un murmullo de ultraje liberal. Este es el momento triunfal del liberalismo, conseguido gracias al atractivo de las libertades democráticas para las poblaciones del este de Europa, y el atractivo de los derechos de propiedad privada para la *nomenklatura* del bloque soviético. Pero este momento acabará pasando en occidente, como hace mucho que acabó en el este.

El centro geográfico para tal asalto democrático de orientación social sobre el nuevo liberalismo será probablemente el corazón europeo de la democracia social, y, de hecho, de la democracia cristiana de orientación social. Pero existe, claro está, un largo obstáculo a una renovación del desarrollo democrático en Europa bajo la forma de la estructura de la Unión Europea. La forma política de un desafío a la hegemonía liberal tendrá, probablemente, primero un carácter nacional. Sin embargo, la estructura legal constitucionalizada de la UE ofrece eficaces instrumentos para que la UE pelee jurídicamente contra un movimiento nacional que persiga la renovación democrática. La estructura jurídica de la UE podría bloquear la re-imposición del control de capitales y otras medidas para el control social de las fuerzas del mercado. Al mismo tiempo, la Unión carece de toda legitimidad democrática o incluso liberal para llevar a cabo actuaciones políticas. No tiene, por tanto, autoridad de base legal para esa resistencia legal.

Un desafío político nacional al marco legal de la Unión Europea no puede, sin embargo, funcionar si está articulado sobre *una base nacionalista*, ya que tal desafío provocaría una enorme reacción por parte de las clases propietarias. Éstas, a las que tanto rendimiento les ha proporcionado el liberalismo, intentarían galvanizar todas las fuerzas políticas de la Unión Europea, para, en su nombre, combatir el desafío de renovación democrática. Desafío que, por tanto, tendría que estar basado en un programa para democratizar la Unión Europea como federación orientada desde una perspectiva democrático-social. Esto implicaría asumir el núcleo federal racional de la idea europea y darle la vuelta, desde la posición invertida en que está ahora, para devolverla a su sentido correcto. En este momento, la Unión Europea es una constitución disciplinaria para paralizar el control social de la vida económica y blindar reglas de merca-

do que serían reguladas con mayor propiedad en niveles más bajos de gobierno. Mientras tanto, se niega a sí misma los instrumentos para una política macroeconómica centrada en recursos fiscales y en una orientación redistributiva. También carece de la mínima conexión entre, por un lado, autoridad política y realizadora de políticas en un nivel federal y, por otro, resultados electorales democráticos.

No obstante, un programa tal abordaría la cuestión de si la UE presenta la suficiente homogeneidad de valores para constituir semejante entidad política. Algunos argumentarían que esa base sólo puede residir en la homogeneidad étnica o lingüística. Aunque es perfectamente cierto que las profundas divisiones de clase social dentro de una nación dan origen a serios problemas de estabilidad —líderes de fuerte identidad, clases conflictivas—, la idea de que esta identidad pueda ser establecida sobre bases etnicistas o mítico-nacionales es, seguramente, una exageración. Al mismo tiempo, los intentos liberales de unir a Europa mediante la emasculación de una vida política efectivamente democrática, transfiriendo las decisiones sobre las vidas y destinos de la gente a las fuerzas del mercado, son una fórmula para acabar en la desintegración política y para provocar, dentro de los estados miembros, desafíos etnicistas populistas por parte de los movimientos nacionalistas.

Sin embargo, la necesidad de una unión política federal europea, cimentada sobre sólidos valores fundamentales asumidos por la gran mayoría de los ciudadanos de una Europa de este talante, es, sin duda, una idea bien fundada. Los únicos valores comunes para la idea de Europa son, precisamente, los de un orden democrático de fuerte orientación social.

Una renovación democrática con esa base, no obstante, se enfrentaría a dos retos internacionales fundamentales. El primero, sería el desafío de hacer frente a las reacciones americanas. La vuelta a un fuerte compromiso social en Europa significaría un serio reto civilizatorio a la legitimidad del orden socio-político americano. Una identidad democrática europea se enfrentaría, también, inevitablemente a los objetivos del orden global que intentan combinar la búsqueda de un liberalismo global de orientación americana con la aceptación de los valores políticos americanos. No puede haber renovación sostenible en Europa sin una disposición a diferenciar los objetivos colectivos de la democracia europea de los del modelo americano; y, por supuesto, sin una disposición a buscar apoyo dentro de la sociedad americana.

El otro gran desafío para la renovación democrática en Europa es, en muchos aspectos, el más difícil: terminar con una orientación mercantilista, depredadora y coercitiva (mediante artimañas económicas) hacia los países del sur y del este de la Unión europea. Hoy en día, la campaña liberal dentro de las sociedades de la UE se sostiene ofreciendo a sectores de la mano de obra europea una alianza con el capital para luchar contra la construcción de una división del trabajo pan-europea, inclusiva y expansiva, y también contra la creación de

órdenes igualmente inclusivos con respecto a los países del sur. Este mercantilismo socava las condiciones necesarias para el desarrollo progresivo de formas políticas estables en estas sociedades. Convertir las economías de estos países en frágiles, vulnerables y dependientes es precisamente socavar las condiciones para el desarrollo democrático en dichas sociedades.

NOTAS

1. Fritz Scharf, *Governing in Europe: Effective and Democratic?*, OUP, 1999.
2. Carole Pateman, *The Problem of Political Obligation. A Critique of Liberal Theory*, Polity, 1985.
3. Sobre el poder ideológico de esta práctica institucionalizada, véase Perry Anderson, «The Antinomies of Antonio Gramsci», *New Left Review*.
4. Scharf, *op. cit.*
5. G. Garret, *Partisan Politics in the Global Economy*, CUP, 1998.
6. Fox Plevin.
7. Alan Rugman, «From Globalisation to Regionalism: The Foreign Direct Investment Dimension of International Finance», en Karl Kaiser, John J. Kirton y Joseph P. Daniels (eds.), *Shaping a New International Financial System. Challenges of Governance in a Globalizing World*, Ashgate, Aldershot, 2000.
8. Robert Gilpin, *The Challenge of Global Capitalism. The World Economy in the 21st Century*, Princeton University Press, 2000.
9. R. Brenner, «The Economics of Global Turbulence», *New Left Review*, n.º 229 (mayo-junio, 1998).
10. M. Kahler, *Regional Futures and Transatlantic Economic Relations*, Council on Foreign Relations Press, Nueva York, 1995.
11. Wolfgang Streeck, «The Internationalisation of Industrial Relations in Europe: Prospects and Problems», *Politics and Society*, vol. 26, n.º 4 (1998).
12. Éstas no han sido las únicas funciones cumplidas por la UE en las dos últimas décadas: su papel en lo que respecta al Sur y al Este ha revestido gran importancia, como veremos más adelante.
13. Philippe C. Schmitter, «Democracy's Future: More Liberal, Preliberal, or Postliberal?», *The Journal of Democracy* (enero, 1995).
14. Véase Susan Woodward, *The Balkan Tragedy*, The Brookings Institution, Washington, 1995, un análisis imprescindible del desmoronamiento de Yugoslavia. Véase también L. Cohen, *Broken Bonds: Yugoslavia's Disintegration and Balkan Politics in Transition*, Westview, 1995.
15. Michel Chossudovsky (1996), «Dismantling the Former Yugoslavia», Research Paper, University of Ottawa.
16. Woodward, *op. cit.*
17. A. Artner y L. Andor, «Hungary and the Enlargement of the EU», ponencia en la Conferencia *Europe After Nice*, Copenhagen, 2001.
18. Sobre los Estados Unidos y Bosnia, véase P. Gowan, *The Twisted Road To Kosovo, Labour Focus on Eastern Europe*, Londres, 1999, y P. Gowan, «The NATO Powers and the Balkan Tragedy», *New Left Review* (abril-mayo, 1999). Sobre los conflictos intra-occidentales que desempeñaron un papel crucial en la forma que tomaron las Guerras Yugoslavas, véase Paul Cornish, *Partnership in Crisis. The US, Europe and the Fall and Rise of NATO*, Chatham House Papers, Royal Institute of International Affairs, Londres, 1997.

19. G. Merrit, *Eastern Europe and the USSR: The Challenge of Freedom*, Kogan Page, Londres, 1993.

20. La excepción búlgara proviene de la enorme escala de la desindustrialización en este país.

21. Por «globalización» quiero decir una economía dominada por un sector industrial de propiedad occidental y un sector financiero a la vez muy sensible y vulnerable a los mercados y operadores financieros occidentales. En el contexto de la Europa del Este «globalización» y «europeización» son básicamente sinónimos.

22. Inversión directa extranjera que busca explotar la mano de obra barata en un lado de la frontera para exportar a amplios mercados del otro lado.

23. M. Landesmann, «Structural Change in the Transition Economies since 1989», ponencia para la *UN Economic Commission for Europe Seminar From Plan to Market: the Transition process after ten years*, UNECE, Génova, 2000.

Peter Gowan es profesor de Estudios Europeos en la Universidad de North London. Coeditor con Perry Anderson de «The Question of Europe» (Verso, 1994). Autor de «La apuesta global» (Akal, 2000). Miembro del Comité de Redacción de la revista «New Left Review».